
LOS CAMPESINOS DE LAS CORDILLERAS FRENTE A LOS MOVIMIENTOS GUERRILLEROS Y A LA DROGA: ¿ACTORES O VICTIMAS?

Christian Gros*

Traducido por Luis Alberto Restrepo M.**

Al escoger el tema del campesinado andino frente a los movimientos de guerrilla y al narcotráfico, asumimos un riesgo: el de reforzar la imagen unilateral de un agro latinoamericano lugar de todas las violencias, ubicado en el seno de países en crisis, desorganizados, asediados por la pobreza, incapaces de regular sus conflictos, de ingresar en la modernidad y de adueñarse de su historia. Aunque la visión opuesta —la de un mundo rural marcado por los valores comunitarios, habitado por una población supuestamente indígena, pobre pero tranquila, defensora de sus tradiciones y al abrigo de las convulsiones, de la anomia y de las diferentes formas de polución que reinan en las megalópolis— es todavía menos defendible, también es cierto que en los campos andinos no todo se reduce a violencia y desarticulación. No todos los países que conforman el Pacto Andino (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) experimentan la presencia de guerrillas rurales o de bandas poderosamente organizadas de narcotraficantes. Y para aquellos que deben afrontar estas diversas formas de subversión, la situación está lejos de ser la misma en todas las regiones. De hecho, hubiera sido igualmente posible analizar situa-

ciones positivas que muestran cómo el campesinado andino también manifiesta, en situaciones con frecuencia difíciles, una gran capacidad de adaptación e innovación y cómo, en otras regiones, una agricultura moderna participa con dinamismo en el mercado interno o en la exportación. Tratándose de tierras y países distintos, es necesario reconocer que no todo es idéntico.

Sin embargo, la lucha armada y el narcotráfico están fuertemente presentes en algunos países andinos y alcanzan en ellos una proyección rural. Y allí donde despliegan su actividad violenta e ilegal, constituyen un problema mayúsculo para las poblaciones campesinas, sea que éstas se conviertan en víctimas desafortunadas de tales actividades o en actores convencidos de las mismas.

Para no hacer generalizaciones abusivas y para respetar la dimensión territorial y geográfica de estos diferentes fenómenos, optamos por tratar la lucha armada y la droga a partir de estudios de caso. De este modo esperamos restituir la complejidad y diversidad de las distintas situaciones. Porque lo que es verdad en un caso puede no serlo en otro. En algunas regiones la lucha

* Antropólogo, profesor del Instituto de Altos Estudios de América Latina de París.

** Filósofo, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

armada y el narcotráfico se acoplan bien; en otras se contraponen o se presentan aisladamente; en ciertos casos, el campesinado vive en su terruño tradicional y dispone de una organización sólida; en otros es de origen migrante y habita tierras recientemente colonizadas, etc.

Pero la heterogeneidad del campo, de su poblamiento, de su historia y organización, y el carácter desigual de la presencia de la violencia armada y de la droga, no deben hacer perder de vista que estamos también, en relación con la guerrilla y el narcotráfico, frente a actores poderosos que desbordan el marco de una región determinada y que desafían al conjunto de la sociedad y del Estado. Así mismo, sobre la base de estas monografías será necesario derivar algunas observaciones de alcance más general concernientes a nuestro tema. En particular, en relación con las políticas aplicadas por el Estado en sus distintas tentativas de control del espacio territorial, de lucha contra la droga y en favor del desarrollo del campo.

Antes de presentar las diferentes regiones de nuestro estudio falta por justificar el hecho de que no tratemos aquí sino de Colombia y de Perú. ¿No se debería haber incluido a Bolivia, segundo productor de hoja de coca y de pasta de los Andes? La razón de esta opción es simple aunque sea discutible: Colombia y Perú son los únicos que poseen el triste privilegio de experimentar a la vez la presencia de movimientos armados y la del narcotráfico. La convergencia en un mismo país, y con frecuencia en una misma región, de estos dos factores, da lugar a una problemática muy particular. Así sucede, por ejemplo, con el fenómeno conocido bajo el nombre de "narcoguerrilla", es decir, con la presencia de movimientos de lucha armada que persiguen sus fines políticos financiándose ampliamente con el dinero de la droga y que cuentan a veces con el apoyo de campesinos productores de coca.

Sin duda alguna, la presencia simultánea de estas dos formas de subversión plantea formida-

bles retos al Estado. Por lo demás, las razones que impulsan a los pequeños colonos del Chapare boliviano a cultivar la hoja de coca, a pesar de la prohibición gubernamental, apenas si difieren de aquellas que operan en el Perú, en el Alto Huallaga, o en Colombia, en la región del Guaviare. Nuestras conclusiones en esta materia podrían ser también ampliamente retomadas en relación con aquel país.

I. COLOMBIA: UNA NUEVA DECADA PARA LA VIOLENCIA

De todos los países del Pacto Andino, Colombia es el único que logró superar la "década perdida" (1970-1980) con una tasa de crecimiento positivo. Esta relativa buena salud de su economía contrasta fuertemente con una explosión de violencia política y mafiosa que, por el número de sus víctimas, trae a la memoria los peores días de la guerra civil conocida con el nombre de "La Violencia". Aunque la ciudad no ha escapado a este fenómeno, los campos siguen siendo el lugar privilegiado donde se enfrentan el Estado, la guerrilla y las fuerzas paramilitares, apoyadas y financiadas estas últimas por la mafia. A ello se añade que en el campo, y sobre todo en las regiones de colonización, hay organizaciones campesinas e indígenas que han sido convertidas en escenarios de la lucha que estas diferentes fuerzas libran entre sí. Ofrecemos aquí tres ejemplos de una situación que afecta a muchas otras regiones de Colombia, aunque ciertamente de manera muy desigual.

1. De la colonización armada a la "narcoguerrilla" en la región del Guaviare¹

La colonización del Guaviare, situado al sureste de Villavicencio, comienza en los años

1 Véase A. Molano, *Selva adentro, una historia oral de la colonización del Guaviare*, Bogotá, Ed. El Ancora, 1987; "Violencia y colonización", en *Revista Foro*, No. 6, Bogotá, junio de 1988; "Colonos, Estado y Violencia", en *Revista Foro*, No. 9, mayo 1989; J. Jaramillo, L. Mora, F. Cubides, *Colonización, coca y guerrilla*, Bogotá, Ed. Universidad Nacional de Colombia, 1986.

treinta, pero no adquiere cierta amplitud sino veinte años más tarde, en el momento de la guerra civil ("La Violencia"). Comienza entonces una historia sorprendente, con el ingreso en el Guayabero, en las proximidades de la Sierra de la Macarena, de una columna de campesinos armados —hombres, mujeres y niños— que huyen de una ofensiva militar desplegada en el Sumapaz donde se habían organizado como grupo de autodefensa con la ayuda del Partido Comunista. Después de varios días de camino esta columna se instala en lo más profundo de la selva, lejos de toda autoridad civil. Nace entonces una "colonización armada" en la que el fusil se encuentra siempre cerca del hacha y en la cual los colonos reproducen espontáneamente una forma de organización político-militar ya experimentada con éxito en tierras altas. La agricultura es de autosubsistencia y carente de infraestructuras que permitan la comercialización.

En el vecino Guaviare otra colonización de pequeños campesinos que huyen también de la violencia, asume una forma más espontánea y anárquica que desemboca, sin embargo, en el mismo tipo de agricultura. A fines de los años sesenta, el gobierno organiza un programa de colonización que provoca una masiva afluencia de campesinos, pero el éxito del programa no es evidente. La carencia de carreteras hace imposible la venta de las cosechas.

En los años setenta, en pleno marasmo de la región, se produce un **boom** en torno a la marihuana. Pero el auge es de corta duración: la competencia de las plantaciones del norte, mejor situadas, resulta fatal. Pero la marihuana no era sino un ensayo. En 1978 se introducen las primeras plantas de coca, se instalan grandes laboratorios y las cosas comienzan a ponerse serias. En pocos años el Guaviare se transforma en una de las principales regiones de producción de coca en el país. Por fin los colonos se ven recompensados por sus sufrimientos y sus esfuerzos. La posibilidad de en-

riquecerse es aprovechada con entusiasmo y, en realidad, el pequeño campesino no tiene alternativa: con el **boom** de la coca viene el alza incontenible de los precios. Imposible sobrevivir sin participar en su economía. La coca provoca también un ingreso masivo de aventureros, un auge brutal de los conflictos por la tierra y un considerable incremento de la criminalidad. Se crean nuevas colonias sometidas a la autoridad de intermediarios ligados al tráfico y orientadas por un solo propósito: cultivar la coca. Se sucede entonces, en una gran confusión, la primera crisis de sobreproducción y el derrumbe de los precios.

La región, provisionalmente abandonada, es reconquistada enseguida por la guerrilla del Partido Comunista: las FARC². Estas, presentes desde la época heroica de la "colonización armada", pero inicialmente desconcertadas por el **boom** de la coca y vacilantes acerca de la conducta que deberían asumir frente a la producción de la droga, aprovechan la relativa calma para rehacerse y reafirmar su control regional. Eliminan la pequeña delincuencia y bajo su dirección se crean comités de acción comunal, sindicatos de pequeños productores, cooperativas de compraventa, etc. Se instala entonces la ley del monte. Cuando los precios de la coca vuelven a subir, la mafia encuentra el terreno ocupado y se ve obligada a negociar su presencia a las puertas de la región. La guerrilla, que en adelante acepta la producción de coca —prohibirla le implicaría aislarla de sus bases— y que busca incluso sacar provecho de ella, impone sus condiciones a unos y otros. A los colonos les prohíbe hacerse pagar en "basuco"³, les fija los precios de los salarios, les exige plantar productos de pancoger y pagar un tributo sobre la hoja (el "gramaje", o 10% de la venta); a la mafia le impone su control territorial, el monopolio de las armas y un impuesto de venta del 8%.

De este acuerdo entre dos fuerzas igualmente ilegales nace lo que se llamará después con el mismo nombre, la "narcoguerrilla", como si los

2 FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, "brazo armado" del Partido Comunista colombiano, creadas a comienzos de los años sesenta después de la destrucción de las zonas de autodefensa.

3 Producto extraído de la pasta base cuyo consumo es muy tóxico.

dos bandos compartieran una misma finalidad política, económica e ideológica. Como lo vemos luego, no hay nada más ajeno a la realidad. Sin embargo, es un hecho que la guerrilla obtiene los mayores beneficios de su control territorial: sus recursos, en adelante considerables, serán utilizados para reforzar su potencial militar y su acción cívica. Reina desde entonces en la región como señor y dueño: los registros civiles, el crédito, los programas de salud, la justicia, la asistencia técnica, los trabajos de infraestructura quedan bajo su control. Recibe el apoyo del pequeño colono. El ejército no penetra en el Guaviare.

A fines de los años ochenta se produce la ruptura. La mafia (encabezada por Rodríguez Gacha) tolera cada vez menos el control ejercido por las FARC sobre uno de sus lugares de producción y sobre todo les reprocha la multiplicación de actos de bandidaje en su contra. Con el asesinato de Jaime Pardo Leal, dirigente de la Unión Patriótica (organización legal nacida de las FARC durante la tregua del gobierno de Betancur), se cortan los vínculos entre ambos bandos. La guerra se concentra en los dirigentes populares a quienes se considera como los representantes civiles de la guerrilla. La mafia transfiere además los laboratorios del Guaviare hacia el Brasil y el Perú, y disminuye considerablemente sus compras de pasta. Lógicamente, los precios se derrumban. Los colonos se ven obligados a reconvertirse. En la región, la guerrilla pierde sus recursos y una buena parte de sus bases.

El gobierno, que tenía razones para temerlo todo de la "narcoguerrilla", interviene de lleno en el asunto. Lanza una ofensiva de reconquista del Guaviare mediante el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), programa concebido para asegurar su acción en las regiones de conflicto. La metodología del PNR pasa en

ese entonces por la participación comunitaria organizada en torno a programas de desarrollo (producción, comercialización, educación, salud, vías, reforma agraria, titulación de tierras). Cuenta —al menos en la época— con una importante financiación y prevé una línea presupuestal para la sustitución de cultivos (cacao, maíz...). El PNR obtiene un éxito real. Le quita el piso a la guerrilla y ofrece una alternativa a la producción de droga justamente en el momento en que ésta no encuentra compradores. Una parte de la población, que se adaptaba a la guerrilla mientras ésta era poderosa y defendía una actividad lucrativa, pero que no tenía ninguna especial simpatía ideológica con ella y aspiraba a la paz, se muestra deseosa de cooperar con el gobierno. Hoy el Guaviare es una zona abierta y pobre. De la riqueza pasada no queda gran cosa. Guerrillas y mafias han concentrado sus fuerzas en otras regiones.

2. “Narcoparamilitares” y campesinos en el Magdalena Medio⁴

A muchos centenares de kilómetros al noreste del Guaviare, el Magdalena Medio es una región de frontera agrícola que, paradójicamente, se encuentra en el corazón mismo de la Colombia útil. Fértil pero durante largo tiempo desprovista de infraestructura vial, aquella zona recibe la primera oleada de colonos en los años cincuenta, cuando la guerra civil expulsa a los campesinos de las regiones vecinas (Tolima, Caldas, Antioquia, Santander, Cundinamarca). Estos llegan a desbrozar la selva y a poner las bases de una agricultura de subsistencia. En torno a Puerto Boyacá, en el norte, región que luego se convertirá en el epicentro del "paramilitarismo"⁵, numerosos colonos ocupan las tierras entregadas unos veinte años antes, en concesión, a la Texas Petro-

4 Véase C. Medina Gallero, *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia*, Ed. Documentos periodísticos, 1990; Ibán de Rementería, "Hipótesis sobre la violencia reciente en el Magdalena Medio", en *Passado y presente de la violencia en Colombia*, Ed. CEREC, 1986; "La violencia en el Magdalena Medio", en *Economía Colombiana*, No. 160-161, septiembre 1984; A. Reyes Posada, "La violencia y la expansión territorial del narcotráfico", en J. G. Tokatlian y B. M. Bagley, *Economía política del narcotráfico*, Ed. CEREC-CEI, 1990.

5 Barbarismo inventado en Colombia en los años ochenta para dar cuenta de la temible alianza que se establece en el Magdalena Medio entre el ejército, los grupos de autodefensa campesina, las fuerzas paramilitares y la droga.

leum Company. Esta ocupación se hace sin títulos y en condiciones difíciles. La Texas, interesada en el subsuelo, hace firmar a los "invasores" actas de arrendamiento que significan que la empresa continúa siendo propietaria de las tierras desbrozadas. Más tarde cede una parte de sus dominios a nuevos recién llegados y éstos las heredan de los "finqueros" que las ocupan. Posteriormente, transfiere gran parte de las tierras restantes al Incora con el encargo de reglamentar la situación de los ocupantes sin título, lo que se hace sólo a medias.

De hecho, durante los años sesenta los pequeños colonos son implacablemente empujados hacia adelante, hacia el frente pionero, o bien se verán obligados a trabajar como asalariados en sus antiguas tierras. Su resistencia se hace tanto más difícil debido a que los nuevos propietarios no vacilan en utilizar los servicios de asesinos a sueldo para deshacerse de ellos. Así, en manos de una oligarquía local constituida por comerciantes, oficiales en retiro y ganaderos atraídos por la riqueza de la región, se constituye una propiedad grande y mediana de cría de ganado.

En la misma época hace su entrada la guerrilla de las FARC. La región, situada en el centro del país y poseedora de petróleo, presenta un interés estratégico no desdeñable y ofrece condiciones ideales para la implantación de la lucha armada: conflictos sociales violentos, ausencia del Estado y de sus servicios, terreno accidentado propicio a la lucha armada, comunicaciones difíciles. La técnica utilizada es clásica: ejecución sumaria de los indeseables (pequeños delincuentes, ladrones de ganado), cobro de un impuesto "revolucionario", defensa de los pequeños colonos y creación de organizaciones de base. El papel de policía desempeñado por la guerrilla parece relativamente bien aceptado por los colonos e incluso por ciertos ganaderos: no hay Estado y la **pax guerrillera** es preferible al desorden. En los años setenta su control sobre la región es incontrovertible y tiene colocados a sus hombres en el concejo municipal de Puerto Boyacá.

Todo cambia cuando las FARC, seguras de su control, acrecientan su presión sobre la población, aumentan los tributos forzados y multi-

plican los secuestros por los que exigen rescate. La región entra entonces en una nueva era de violencia e incertidumbre. El ejército, llamado en auxilio, añade una confusión aún mayor. De acuerdo con su costumbre, multiplica las acciones contra la población civil a falta de capacidad para hacerle frente a los insurgentes. Los campesinos, atenazados entre una guerrilla agresiva que multiplica los asesinatos de supuestos traidores y el ejército que no se queda atrás, huyen en masa.

En 1982 llega un nuevo responsable militar que poco a poco se gana el apoyo de los habitantes mediante acciones cívico-militares. Bajo su impulso y con la ayuda de los ganaderos, se crean grupos de autodefensa campesina. El ejército favorece también la aparición de una fuerza paramilitar financiada por los ganaderos. Unos y otros llevan a cabo una lucha sin cuartel contra la "subversión" comunista, eliminando a todos los individuos que, a su juicio, simpatizan directa o indirectamente con la guerrilla. Las organizaciones populares son las primeras afectadas. La guerrilla pierde su apoyo y sale en retirada dejando sin defensa a sus últimos simpatizantes. Contra los deseos del gobierno de Betancur que en la misma época negocia un cese al fuego con los insurgentes a nivel nacional, para una parte del país, el Magdalena Medio se convierte en el símbolo de la lucha antiguerrillera y en la demostración de que la población civil, apoyada por el ejército y los organismos de seguridad, puede acabar con los rebeldes si no vacila en recurrir a los medios que sean necesarios.

La Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam) es la cabeza visible de la combinación autodefensas-paramilitares responsable de centenares de muertos. Pero su papel no se limita a ello. La asociación adelanta acciones en el terreno económico, social, educativo, de salud y técnico. Cuenta con las contribuciones financieras aportadas por los ganaderos y los pequeños colonos. En 1986, bajo el gobierno de Barco, Acdegam recibe incluso el reconocimiento oficial. La región se convierte entonces en una especie de "república independiente"

anticomunista bajo protección militar. La política de descentralización municipal contribuye a reforzar esta autonomía.

Con la incursión en masa de la mafia de la droga ligada al cartel de Medellín se franquea un nuevo paso. La mafia colombiana ha consagrado siempre una parte de sus inmensos ingresos a la compra de tierras y de hatos. Se estima que en diez años ha invertido cerca de cinco mil quinientos millones de dólares y que posee más de un millón de hectáreas, buena parte de ellas en el Magdalena Medio. En efecto, las condiciones son aquí ideales para sus inversiones: las tierras son ricas, la región es propicia para la instalación de laboratorios y el envío de la droga. La población adelanta una lucha sin cuartel contra la guerrilla y dispone de su propio aparato militar. Pero la mafia (desde su experiencia del Guaviare) es violentamente anticomunista. La alianza con los ganaderos de la región es, pues, cosa fácil.

Acdegam encuentra en los recién llegados un apoyo generoso e interesado. Con la complicidad del ejército, la organización paramilitar juega el papel de ejército privado de la mafia. Se crean centros de entrenamiento para asesinos a sueldo (sicarios) con la ayuda de instructores extranjeros. Ha nacido entonces el "narcoparamilitarismo". Este se halla detrás de una serie de masacres colectivas que afectan pequeños poblados considerados como pro-comunistas.

El gobierno de Barco, que tardó en reaccionar, paga el precio de su tardanza: dos candidatos a la Presidencia de la República son asesinados, es eliminado un número elevado de funcionarios públicos, etc. El gobierno disuelve entonces a Acdegam, da de baja a Rodríguez Gacha (uno de los patrones del cartel de Medellín), confisca tierras de la mafia, el ejército es llamado al orden y recibe el encargo de la lucha antimafia. Pero con todo ello no se logra pacificar la región. Aprovechando las dificultades de la mafia, reaparece la guerrilla. Después de haber creído, primero en la guerrilla,

luego en las autodefensas y más tarde en la mafia, los pequeños campesinos no saben ya en quién diablos confiar. Algunos concluyen que conviene organizarse a todo precio en una fuerza autónoma y pacífica que rechace por parejo guerrillas y paramilitares. Pero muy pronto pagan el precio de su audacia.

3. Cauca: organización indígena y guerrilla⁶

Sobre la cordillera central, en las tierras altas del Cauca, la situación es bien diferente aunque no por ello menos violenta. Vive aquí una población indígena campesina que desde la época colonial intenta por todos los medios defender sus tierras contra la ambición de los hacendados blancos residentes en Popayán. Sus condiciones de vida son miserables: el Cauca indígena tiene los peores índices de mortalidad y malnutrición del país.

En la región del Cauca nace, a comienzos de los años setenta, un vigoroso movimiento indígena que se propone la recuperación de las tierras comunales y la eliminación de la servidumbre. Su estrategia es original: se trata de reconstruir los "resguardos"⁷ destruidos por la incursión de las haciendas y por la política de disolución del gobierno; de reforzar sus instancias dirigentes elegidas —el cabildo—, y de afirmar la autonomía del conjunto. El movimiento se dota de una organización regional, el CRIC, Consejo Regional de Indígenas del Cauca, que poco a poco encuentra émulos en otras regiones indígenas del país. La lucha por la tierra es vivaz: las comunidades hacen frente a los "matones" pagados por los grandes propietarios, a la represión ejercida por la policía y a la militarización de la región. Más de un centenar de dirigentes y militantes dejan la vida en el empeño. Pero la acción es eficaz: veinte años después el CRIC puede reivindicar la recuperación de setenta mil hectáreas, es decir, de la mayor parte de

⁶ Véase C. Gros, "Colombia: nueva política indigenista y organizaciones indígenas", en *Problèmes d'Amérique Latine*, No. 96, 1990; *Colombia indígena: identidad cultural y cambios sociales*, Ed. CEREC, Bogotá, 1991.

⁷ El "resguardo" es una entidad territorial de origen colonial que reconoce la propiedad colectiva del suelo a una comunidad.

las tierras arrebatadas a las comunidades desde hace un siglo. Este éxito se explica por la determinación de la población indígena y por la existencia de una base jurídica favorable: las tierras acaparadas por la hacienda⁸ son inalienables, los verdaderos invasores son los hacendados. Más tarde la voluntad del gobierno de pacificar la región facilita la reconquista indígena. Paralelamente a la recuperación de las tierras, el CRIC promueve un sistema cooperativo, un programa de educación bilingüe, asistencia jurídica y técnica, proyectos de desarrollo, y todo ello sometido a la autoridad indígena.

En este contexto de fuerte movilización comunitaria y con la esperanza de beneficiarse de él, interviene la guerrilla: ante todo las FARC⁹, luego el M-19 que construye allí su santuario, pero también el EPL, el Ricardo Franco, el ELN y el PRT¹⁰. Pronto aparecen contradicciones entre el CRIC y los diversos frentes de la guerrilla. Estos son acusados de no respetar las instancias comunitarias, de aplicar una justicia expeditiva, de reclutar jóvenes indígenas y dar pretexto a la represión militar. Se cuestiona particularmente a las FARC. Se les reprocha su defensa de los grandes propietarios que pagan el impuesto revolucionario contra las recuperaciones de tierra, y la masacre de veinte campesinos en la región de Tigre y Munichique en 1981, realizada con ese pretexto. En febrero de 1985, treinta y nueve cabildos (o sea, casi la totalidad) firman una declaración que pide, sin éxito, a la guerrilla y al ejército que abandonen la región. Esta exigencia retornará como un leitmotiv en las declaraciones de las autoridades indígenas.

Entre tanto se crea una organización indígena que practica la autodefensa: el Quintín Lame. El Quintín se da a conocer en 1984, luego del asesinato de un cura indígena activista del CRIC y de la represión que acompaña-

ña una invasión de tierras realizada en López Adentro, en una propiedad que pertenece a la gran oligarquía azucarera del Valle. Negando ser el brazo armado del CRIC pero apoyando las principales orientaciones de este movimiento, el Quintín se presenta como el defensor de las comunidades frente a sus enemigos: los terratenientes y sus matones pagados. De hecho, el Quintín, muy próximo en sus orígenes al M-19, es también una respuesta indígena a la presencia de la guerrilla. En el plano político su posición es algo ambigua: aunque no pretende ser una organización político-militar comprometida en la lucha por el poder, está presente en la instancia coordinadora de las guerrillas a nivel nacional. Si la simpatía de una parte de las comunidades para con él es inicialmente manifiesta —el Quintín proclama en alta voz que respeta la autoridad de los cabildos—, este capital se va erosionando con el correr del tiempo. El Quintín practica con demasiada frecuencia los mismos métodos que ya habían conducido a un rechazo de la guerrilla: ejecuciones sumarias, intervención en los conflictos internos de las comunidades, etc. Pero el hecho es que la presencia combinada de una fuerte movilización indígena y de una organización como el Quintín no permite, como en otras regiones, la implantación de grupos paramilitares encargados de luchar contra la guerrilla y contra toda forma organizada de protesta social.

Con el paso de los años y después de que la lucha por la tierra produjera sus frutos, las comunidades no tienen ya las mismas razones para movilizarse y aspiran a la paz. Ha llegado la hora de dedicarse al cultivo de las tierras recuperadas y a la satisfacción de las enormes necesidades en términos de servicios públicos, de infraestructura, de educación, de salud, etc. Para ello la alianza, la negociación, el compromiso con los poderes públicos parecen preferibles a la confrontación. Por su parte, el

⁸ Hacienda: gran propiedad tradicional en donde rigen relaciones semi-serviles.

⁹ Se trata de los frentes 6o. y 8o.

¹⁰ El M-19, movimiento entonces armado, de ideología nacional-populista; el EPL (Ejército Popular de Liberación), brazo armado del PC-ML (pro-chino); el ELN (Ejército de Liberación Nacional), guerrilla foquista animada por un ex-cura español; el Ricardo Franco, grupo disidente de las FARC; el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), trotskysta.

CRIC intenta combinar con dificultad un discurso radical con una práctica de ONG especializada en el etno-desarrollo. En cuanto al Quintín, éste ha perdido su legitimidad. En cambio el gobierno tiene ante sí un vasto terreno en el cual puede desplegar su política de "pacificación".

Si el Guaviare se convirtió en el ejemplo de una reconquista posible contra la mafia y la guerrilla, el Cauca indica una posible recuperación por parte del Estado de uno de los pilares de la lucha indígena y de la guerrilla. El PNR, que tiene una dimensión específica dirigida hacia las poblaciones indígenas, se juega, también aquí, una carta decisiva. Por entonces adecuadamente financiado y promovido por un personal competente, su método de trabajo en torno a programas concretos de desarrollo colocados bajo control comunitario, es bien acogido. El desarme del M-19 y luego del EPL, del Quintín Lame y del PRT hacen bajar la presión militar en una región a la que buena falta le hacía. Sólo faltaría que las FARC y el ELN buscaran ahora recuperar el espacio desalojado por aquellos que han optado por renunciar a la vía armada.

II. PERU: QUIEBRA DEL ESTADO Y MOVILIZACION CAMPESINA

Mientras Colombia manifiesta un verdadero dinamismo económico, el Perú está en quiebra. Y esta quiebra afecta ante todo al Estado. El Estado peruano no solamente ha perdido el control de vastos espacios de su territorio (lo que también acontece en Colombia) sino que su capacidad de intervención en campos ligados a su acción más inmediata se reduce día a día. Su presupuesto, ridícula-

mente débil, no le permite pagar a sus propios funcionarios.

También en el Perú se da la combinación de la lucha armada y el narcotráfico con la presencia eventual de fuertes movilizaciones campesinas. Sin embargo, aunque la guerrilla peruana no tiene nada que envidiar a la colombiana en términos de violencia, de control territorial y de acceso al dinero de la droga, el narcotráfico sigue estando ampliamente controlado por los carteles que han hecho tan célebre al país vecino y no ha realizado, como allí, un intento frontal y violento de desestabilización del Estado, por lo cual es, sin duda, un mal menor.

1. Una guerra "Campa" en la selva central del Perú¹¹

El 8 de diciembre de 1989, el presidente de las comunidades Ashaninka del río Pichi es retenido con dos de sus compañeros por guerrilleros del MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) y poco después es ejecutado. A comienzos de enero, cerca de quince mil Ashanincas de la región del Pichi, de los cuales tres mil son guerreros, atacan las bases del MRTA. Matan a veinticinco guerrilleros y en masa invaden la capital del distrito, Puerto Bermúdez, la que ocupan durante una decena de días mientras que una columna ataca La Merced donde son igualmente eliminados nueve miembros del MRTA. En un comunicado ampliamente difundido por los medios, los Ashaninka declaran la guerra a los narcotraficantes, al MRTA y a la guerrilla de Sendero Luminoso y acusan a las autoridades civiles y militares que, por su incuria, les obligan a tomar las armas¹². Con el ingreso de las poblaciones indígenas del piedemonte en la violen-

11 Se puede consultar a F. M. Renard-Casevitz, "Commerce et guerre dans la forêt centrale du Pérou", en **Document de recherche de l'ERSIPAL-CREDIAL**, No. 49, 1991; "Guerre, violence et identité à partir de sociétés du piémont amazonien des Andes centrales", en **Cahiers de l'ORSTOM**, serie **Sciences Humaines**, Vol. XXI, No. 1: Anthropologie et histoire; Gustavo Gorriti, "Terror in the Andes: the Flight of the Ashaninka", en **The New York Times Magazine**, 2-12-1990; Francisco Ballón Aguirre, "La rebelión de los Ashanincas", en **Quehacer**, No. 63, marzo-abril de 1990.

12 Véase "ANAP, organización Ashaninka del río Pichi, condena el asesinato de su presidente", en **La República**, 5-1-90.

cia y la guerra, parece abrirse una nueva etapa para el Perú.

Los Ashaninka forman uno de los subgrupos "Campa"¹³ que viven al Este del departamento de Junín, en la selva central peruana. Esta región de relieve accidentado, cubierta por una densa selva, situada a medio camino entre la cordillera central y la cuenca amazónica, a la altura de Lima, ocupa una notable posición estratégica en el país. Mucho antes de la época colonial, los "Campa" formaban un tapón entre las poblaciones indígenas de las tierras bajas y las organizadas como Imperio en los Andes. Un tapón eficaz porque, aunque en aquella época y más tarde las relaciones entre los "Campa" y las poblaciones quechuáfonas de las tierras altas donde residen los blancos son relativamente intensas, los "Campa", que gozan de una bien fundada reputación de guerreros, mantienen celosamente su autonomía. La historia ha conservado el recuerdo de sus levantamientos, comenzando por el más conocido, el de Juan Santos Atahualpa, que desde 1742 hasta 1752 enciende toda la región y derrota a los españoles. En fechas más próximas a nosotros, en 1913, los "Campa" declaran la guerra a los patronos del caucho que invaden sus tierras, y clausuran de manera permanente el curso intermedio del río Pichi a la circulación de los blancos.

La tenacidad de los "Campa" para hacer respetar sus territorios sólo es comparable a la de los blancos para invadir sus tierras, comenzando por los misioneros. El Estado peruano moderno no se queda atrás. Pretende controlar esta región estratégica y considera que las selvas que cubren el Pichi y el Palcazu deben ser explotadas y colonizadas (es decir, invadidas y destruidas)¹⁴. En buena medida, para hacer frente a estas agresiones —en el Pichi-

Palcazu numerosas comunidades son tratadas como invasoras de sus propias tierras, entregadas en concesión a compañías madereras— las diferentes comunidades "Campa" y los grupos Pano, que viven más al norte, han formado una multitud de nuevas organizaciones reunidas en confederaciones interétnicas incluso rivales (AIDESEP y CONAP)¹⁵. El dinamismo de estas poblaciones del piedemonte amazónico se manifiesta también en la dimensión económica con la creación, hace cerca de treinta años, de una cooperativa: la CECONSEC (Centrales de las Comunidades Nativas de la Selva Central), encargada de asegurar la comercialización de los productos de la selva.

La posición estratégica del territorio "Campa" en el eje central que liga a la capital con las tierras bajas, pasando por los ricos valles agrícolas y las principales minas del país, explica el interés que le otorgan el ejército, la guerrilla del MRTA o de Sendero Luminoso y los narcotraficantes.

El MRTA es la prolongación moderna del MIR¹⁶ que en los años sesenta, siguiendo el modelo fujista, intentó enfrentarse al gobierno peruano. Fundado en 1980, su base social parece estar constituida por una clase media urbana pauperizada a la cual se habrían añadido sectores marginales. Cuenta en sus filas con algunos oficiales nostálgicos de la época del gobierno militar revolucionario de Velasco Alvarado (1968-1974). Al contrario del fundamentalismo de Sendero Luminoso que se dirige sobre todo a poblaciones desestructuradas y de su rechazo de toda alianza política, el MRTA pretende ser la expresión armada de una izquierda peruana radical que no rehusa la vía de las armas. El MRTA se distingue también de Sendero por su rechazo de una política de tierra arrasada.

13 El término "Campa" fue utilizado por los misioneros para designar a los grupos Arawak preandinos (Amuesha, Ashaninka, Matsiguenga, Nomatsiguenga) del Perú central. Este término de uso común es rechazado por los interesados mismos, por lo cual lo transcribimos entre comillas. Los "Campa" son alrededor de setenta mil.

14 El principal artífice de esta política de "valorización" es el presidente Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985).

15 AIDESEP: Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, fundada en 1980; CONAP: Confederación de las Nacionalidades Amazónicas del Perú, fundada en 1987. Ver sobre este tema, a J. P. Chaumeil: "Les nouveaux chefs: pratiques politiques et organisation indigenes en Amazonie peruvienne", en *Problèmes d'Amérique Latine*, No. 96, 1990.

16 MIR: Movimiento de la Izquierda Revolucionaria formado por militantes salidos del APRA, partido nacional-populista fundado por Haya de la Torre. El MIR contaba con quinientos a dos mil guerrilleros.

Mientras que, hasta 1986, su actividad es sobre todo urbana, al año siguiente abre dos frentes en el piedemonte amazónico: uno en San Martín, en el noreste, y el otro en el centro, en Junín, justamente entre los Ashaninca. Hay que anotar que el líder Ashaninca asesinado por el MRTA había sido acusado de haber contribuido a la desaparición de un dirigente del MIR instalado en esta región unos veinticinco años antes. Hay que anotar igualmente que en esta región el MRTA se encuentra en competencia con Sendero Luminoso¹⁷ que, con el mismo objetivo de crearse una zona refugio en el centro del país, se implantó un poco más al sur entre los ríos Perené y Ené. De este modo, a comienzos de enero de 1990, los senderistas, que no han retrocedido nunca ante las masacres colectivas, producen una decena de muertos entre los Ashanincas-Nomatsiguenga que rechazan el reclutamiento forzado de los jóvenes en la guerrilla, y algunos días más tarde matan a treinta y cinco hombres, mujeres y niños en el pueblo de Santo Sanibeni...

En respuesta a las diferentes masacres, los Ashanincas declaran entonces la guerra tanto a los senderistas como al MRTA y a los narcotraficantes. La capacidad de movilización de los Ashanincas —la posibilidad de reunir en pocos días y de organizar un ejército de varios miles de guerreros provenientes de numerosas comunidades situadas a veces a varios días de camino del lugar del drama— sorprendió a más de un observador, comenzando por la guerrilla. Tanto más cuanto que a los Ashaninca, quienes habían decidido formar un “ejército Campa”, se sumaron luego seis mil Yanesha provenientes del Palcazu vecino. Los historiadores y antropólogos afirman que se trata ni más ni menos que de la reactualización de una forma tradicional de conducción de las guerras pan-tribales destinada exclusivamente a combatir a un enemigo extranjero (no amazónico). Técnica tradicional a la que se añaden elemen-

tos más modernos, como el apoyo dado por la presencia de nuevas federaciones, el uso de los medios y la capacidad de intervenir en el ámbito internacional. Otros observadores han hecho notar la complacencia del ejército que ve en esta movilización guerrera a un aliado inesperado contra un enemigo común. Sin embargo, probablemente se trata más bien de una alianza y no de una adhesión de las comunidades a grupos de autodefensa como los que, con mayor o menor éxito, ha intentado implantar el ejército en otras regiones del país, en los Andes. Finalmente, se dice también que en el norte algunos “Campas” participan activamente en las filas del MRTA. Esto supondría otro tipo de alianza que podría tener por base un interés común (sea contra los “narcos”, para defenderse de Sendero o para hacer respetar sus tierras). El hecho es que el MRTA, después de la movilización indígena, hizo su autocrítica y decidió abandonar el territorio Ashaninca. Sendero, que no tiene la misma actitud (y que dispone de otros medios), probablemente intenta aprovechar la oportunidad.

2. Lucha por la tierra en Puno¹⁸

Lejos del territorio “Campa”, en la frontera de Bolivia y al borde del lago Titicaca, el departamento de Puno hace parte de aquella mancha indígena cuya eventual sublevación ha llenado siempre de temor a los criollos de Lima. Aquí la región es pobre y la lucha por la tierra adelantada por las comunidades indígenas no es palabra vacía. De 1860 a 1930 se cuenta no menos de una cincuentena de levantamientos, pequeños o grandes, realizados por los campesinos contra las haciendas que les han arrebatado sus tierras para desarrollar en ellas la cría de la alpaca, o contra los abusos de las autoridades locales, levantamientos severamen-

17 Entre la literatura relativamente abundante referente a Sendero Luminoso se puede consultar: Carlos Iván de Gregori, *Ayacucho 1969-1979. El surgimiento de Sendero Luminoso*, Lima, IEP, 1990; Henri Favre, “Perú: Sendero Luminoso y horizontes ocultos”, en *Cuadernos americanos*, julio-agosto, 1987; Alan Hertoghe, Alan Labrousse, *Le Sentier Lumineux du Pérou, un nouvel intégrisme dans le tiers monde*, Ed. La Découverte, 1989.

18 Carlos López Ahedo, *Apuntes para una historia de la lucha por la tierra en Puno durante el siglo XX*, Instituto de Apoyo Agrario, 1988; Raúl González, “¿Qué pasa en Puno? El PUM, el PAP, Sendero y Alan García”, en *Quehacer*, No. 43, octubre-noviembre de 1986; Guido Delran, *Historia rural del Perú*, CERA, Cusco, 1978.

te castigados¹⁹. Esta dura lección explica por qué Puno permanece tan largo tiempo al margen de los movimientos campesinos que afectan a los departamentos vecinos durante los años cincuenta y sesenta. Marginamiento provisional, porque actualmente este departamento encabeza un poderoso movimiento de recuperación de tierras, movimiento que por primera vez en la historia de las comunidades resulta victorioso. Antes de ello había acontecido la reforma agraria del general Velasco que transformó en su momento la estructura local de poder, expulsó a los gamonales²⁰ y dejó a las comunidades en la misma miseria de siempre. Y esta no es la menor paradoja de una reforma agraria que se cuenta entre las más radicales que haya conocido el continente. En vez de ser entregadas a las comunidades, las tierras de las haciendas pasaron entonces a manos de empresas asociativas para beneficio de un número reducido de ex-asalariados y de una nueva clase de administradores y burocratas. En la región de Puno, las comunidades no reciben sino un 2.5% del millón novecientas mil hectáreas reformadas.

CUADRO No. 1 PUNO: EXPLOTACIONES AGRICOLAS SEGUN LA TALLA (1961)

Dimensión (ha)	Número de explotac.	%	Superficie (ha)	(%)
0 a 1	49.627	45.3	20.171	0.7
1 a 5	41.248	37.6	91.371	3.1
5 a 500	17.842	16.3	573.691	19.4
Subtotal	108.717	99.2	685.234	23.2
+ de 500	886	0.8	2.265.531	76.8
Total	109.603	100.0	2.950.765	100.0

Fuente: Censo Agropecuario, Puno, 1961

19 Véase, por ejemplo, la represión realizada por el mayor Teodomiro Gutiérrez, alias "Rumimaki", en las provincias de Azangaro y Huancané en 1915 para la obtención de las tierras y en contra de los abusos de los negociantes en lana.

20 Propietarios de haciendas que disponen de un fuerte poder político.

CUADRO No. 2 PUNO: REFORMA AGRARIA

Modalidad	Superficie	%	Número de familias
Empresas	1.766.280	90.0	10.179
Comunidades	49.192	2.5	11.271
Campesinos individuales	150.744	7.5	1.559
Total	1.966.216	100.0	23.009

Fuente: Dirección General de la Agricultura, 1981

CUADRO No. 3 SUPERFICIE MEDIA EN HECTAREAS POR FAMILIA

SAIS	CAPS	ERPS	Comunidades campesinas
148.4	219.2	230.9	4.7

Fuente: Puno, luchemos por la tierra en defensa de la vida, Ayaviri, 1985

Cuadros tomados de: Carlos López Ahedo, *Apuntes para una historia de la lucha por la tierra en Puno durante el siglo XX*, Instituto de Apoyo Agrario, 1988.

De este modo, después de la reforma, una familia que viva en una comunidad dispone en promedio de 4.7 ha contra las 219 ha que le corresponden a los miembros de una cooperativa. La masa de los comuneros permanece entonces marginalizada. Marginalización tanto más fuerte cuanto que los escasos medios disponibles para la modernización agrícola van al sector

cooperativo. La frustración es enorme. Al final de los años setenta, cuando la crisis del sector cooperativo se convierte en una evidencia —endeudamiento, corrupción, débiles rendimientos—, se lanza una consigna para los campesinos: **la restructuración democrática de la reforma agraria**. En otros términos, la disolución de las cooperativas y de otras empresas asociativas en beneficio de las comunidades. En 1978, la recién creada Federación Departamental de los Campesinos de Puno (FDCP) se toma la dirección del movimiento. En 1980, el gobierno de Belaúnde decreta el fin de la reforma agraria y promete una parcelación del sector reformado. Pero esto no se lleva a cabo. Cuatro años más tarde, más de 5.000 campesinos ocupan la Plaza de Armas de Puno para expresar su impaciencia ante el incumplimiento. Al año siguiente, una gran marcha campesina realizada en la provincia de Melgar obtiene un notable éxito y le da un impulso definitivo a las primeras recuperaciones de tierra. El presidente García, que acaba de ser elegido y quiere hacer del “trapicio andino” (Cuzco, Puno, Ayacucho) el lugar de una reconquista contra la guerrilla de Sendero Luminoso, promete entonces, en un encuentro realizado en Puno con los campesinos²¹, distribuir 1.100.000 ha provenientes de las cooperativas. Para cumplir esta promesa, era necesario que la presión campesina desbordara a las fuerzas conservadoras locales que, con el APRA, el propio partido del presidente, controlaban el poder local y recurrián a la violencia paramilitar. Y esto acontece efectivamente en 1987, cuando 211 comunidades recuperaron en dos días 385.000 ha. El gobierno pasa entonces a los actos y “reforma la reforma”. Las comunidades ganan una batalla decisiva: 750.000 ha les son finalmente distribuidas.

Esta victoria de las comunidades y de la FDCP se convierte en una derrota para Sendero Luminoso: la recuperación de tierras se había realizado pacíficamente y sin su control. Habiendo penetrado a la fuerza a comienzos de los años ochenta, Sendero Luminoso quería convertir a

la región de Puno en santuario situado a las puertas de Bolivia. A partir de entonces, multiplica las acciones terroristas —sabotajes, justicia sumaria, asesinatos de dirigentes de empresas asociativas, de líderes populares y de campesinos, repartición de ganado perteneciente a las cooperativas— y propone a los comuneros encabezar la lucha (armada) por la recuperación de las tierras. Espera también que la represión ejercida por las tropas antiguerrilla haga inclinar a la población de su lado. Su derrota se debe a diversos factores: en primer lugar, a la presencia de un movimiento organizado, conducido por comunidades sólidamente estructuradas que disponen de un programa reivindicativo claro y accesible y de un sistema federativo —la FDCP—; luego a la acción de una Iglesia Católica muy activa y radicalizada que apoya en la región de Puno la lucha por la tierra y dispone de una sólida red institucional —instituto de educación rural, escuelas, cantinas, radio, cooperativas, programas de investigación y de asistencia técnica— y puede contar con el apoyo de numerosas ONG para el desarrollo; finalmente, a la acción del Estado que, consciente del carácter estratégico de la región, refuerza su presencia militar y, sobre todo, accede por fin a la principal reivindicación campesina.

La restructuración democrática refuerza la organización campesina y corta la hierba bajo los pies de la guerrilla. Pero la capacidad de daño de Sendero Luminoso sigue siendo grande y se ejerce en contra de la Iglesia, los sindicatos, las ONG y todo aquello que en la región simboliza autoridad o alternativas de desarrollo. Así, un alcalde, tres jueces, dos dirigentes de cooperativas son asesinados en 1989, y en la misma operación son destruidos tres centros de investigación agrícola así como el instituto de investigación rural²². Ya un año antes, en el marco de su campaña de intimidación contra la presencia de las ONG, dos cooperantes franceses habían sido asesinados en el Apurímac.

21 Estos grandes encuentros donde el presidente dialoga directamente con la multitud han sido bautizados con el nombre quechua de “rimanakuy”.

22 Véase “Puno: Violencia y terror contra los pobres del campo”, en *Sur*, No. 122, 1989.

3. Huallaga, tierra perdida de la coca²³

Muy diferente es la situación que prevalece en el Huallaga. Aquí, Sendero Luminoso está sólidamente implantado y ha podido contar durante largo tiempo con un amplio apoyo de la población.

El alto y medio Huallaga (departamento de San Martín) es una región de colonización de tierras ricas y abundantes, aptas para el cultivo del café, el cacao, el maíz, el achiote... y la coca. Habiendo ingresado allí la coca en los años setenta bajo el impulso de la mafia colombiana, no cesará de extenderse, pasando de 10.000 ha en 1980, a cerca de 200.000 hacia el fin de la década. El alto y medio Huallaga producen la mayor parte de la coca peruana destinada al narcotráfico²⁴. Desde los obreros agrícolas, recolectores de hoja, hasta los patronos de los carteles colombianos, pasando por los pequeños cultivadores y los intermediarios especializados en la producción de la PBC (pasta, o clorhidrato de cocaína), más de la mitad de la población rural vive desde entonces de este cultivo al margen de la ley.

Cuando Sendero Luminoso y el MRTA ingresan en el alto Huallaga (1983-1985) y comienzan a luchar para asegurarse su control, la región experimenta numerosas dificultades. Se convierte en el teatro de múltiples arreglos de cuentas. La violencia se incrementa. Los colonos que provienen de los cuatro rincones del país están desorganizados. Los carteles imponen su ley, definen las condiciones de compra, controlan y presionan a los productores. La policía antidroga y los organismos de seguridad aumentan el clima de inseguridad, reprimen a los productores y cobran sus propios porcentajes. El gobierno intenta sin éxito imponer sus programas de sustitución de coca.

El MRTA, que alrededor de Tingo María y Uchiza se lanza a la organización de grupos de autodefensa campesina con base en el modelo experimentado por Hugo Blanco²⁵ en Convención y en Lares en los años sesenta, rehusa convertirse en defensor de la coca e incita a los campesinos a orientarse progresivamente hacia otras producciones legales. Actitud "moral" que es mal recibida por una parte de los colonos llegados aquí con la esperanza de hacer fortuna y que apenas sí disponen de otras alternativas, y que tiene por consecuencia la de oponerlos a los narcotraficantes. De esta circunstancia surge una situación de conflicto latente que Sendero aprovecha en su momento para desarollar al MRTA y dominar la región²⁶. Porque Sendero, que se encuentra aquí muy lejos de Ayacucho²⁷, sabe adaptarse y dar prueba de un mayor oportunismo. Presentándose como defensor de los pequeños productores contra los narcotraficantes y las fuerzas represivas, gana en varios tableros. Se conquista una población que tiene gran necesidad de protección y de orden. Puede contar con la neutralidad o el apoyo del narcotráfico en su lucha contra sus enemigos comunes, el MRTA y el gobierno. Encuentra en el control de la principal región productora de droga una financiación asegurada para llevar a cabo, con el apoyo de la población local, su estrategia de guerra popular contra el Estado y el imperialismo.

En la segunda mitad de los años ochenta, Sendero es el dueño incontrovertible del alto Huallaga y la situación de esta región no deja de recordar la del Guaviare en el momento de la más intensa actividad de las FARC: cacería de los delincuentes, intervención de la guerrilla en la determinación de las condiciones de trabajo y en la fijación de salarios, defensa de los pequeños productores frente a los narcotrafi-

23 Acerca del Huallaga se puede consultar: Raúl González, "El Huallaga, un año después, el retorno del oprimido", en *Quehacer*, No. 54, agosto-septiembre de 1988; "El Huallaga: ¿y ahora qué?", en *Quehacer*, No. 61, octubre-noviembre de 1989; José María Salcedo, "El laberinto de la coca", en *Quehacer*, No. 59, junio-julio de 1989; Luis Román Villanueva, "La coca violenta del Huallaga", en *Alerta Agraria*, No. 29, agosto de 1989.

24 Perú posee dos regiones principales productoras de coca: el Valle de Convención y Lares (departamento del Cuzco), región conocida por haber sido la sede de una importante movilización campesina en los años sesenta y donde lo esencial de la producción de la hoja está destinado al mercado legal.

25 Hugo Blanco, dirigente trotskysta.

26 El MRTA tuvo que abandonar sus bases del Alto Huallaga para replegarse en las regiones vecinas de Biabo y Sisa.

27 La región de Ayacucho, de donde surgió Sendero Luminoso, es una de las más arcaicas del país.

cantes, prohibición del consumo de droga e imposición de un estricto orden moral, y organización de grupos armados encargados de la protección de poblaciones y cultivos. La guerrilla remplaza al Estado, a la policía y a las autoridades civiles. Ejerce la justicia, percibe los impuestos, controla el tránsito y las mercancías. Y la población la apoya²⁸.

La impotencia del gobierno se ve agravada por la tensión que reina entre la policía (encargada de la lucha antidroga) y el ejército (encargado de la lucha antiguerrilla), tensión que se hace manifiesta al final de los años ochenta cuando el ejército parte a la reconquista del Huallaga convencido de que ninguna lucha antiguerrillera puede tener éxito sin el apoyo de la población²⁹. Pero, ¿cómo ganarse una población que legitima la guerrilla porque ésta respeta y protege su principal fuente de ingreso? La respuesta es clara: operando una estricta distinción entre la producción de la hoja de coca que debe ser tolerada³⁰ y el narcotráfico que resulta ser el único criminalizado (pero frente al cual se puede cerrar los ojos en caso necesario). La reconquista del Huallaga que se opera entonces demuestra que el apoyo de los colonos a Sendero no significaba una adhesión a las opciones ideológicas y a las prácticas violentas de la guerrilla sino a la necesidad de proteger sus recursos. Sin embargo, la estrategia adelantada por los militares sufre un revés: provoca la oposición del lobby antidroga, comenzando por la de la poderosa DEA. Oposición eficaz: al fin del gobierno de García, el ejército da marcha atrás, aun a riesgo de ver cómo Sendero reconquista el terreno perdido.

Con todo, esta forma de pacificación tuvo también el mérito de crear condiciones favorables a los programas de sustitución de coca. En efecto, si fuera posible hacerle competencia a la coca mediante otros cultivos comerciales (café, cacao o achioite), la reconversión no podría realizarse por vía autoritaria y en cual-

quier caso exigiría tiempo (un plan de café o de cacao no produce antes de dos o tres años). Pero durante este tiempo el cultivador del Huallaga tendría aún necesidad de sus arbustos de coca para vivir y poder invertir en su nueva producción, lo cual era de hecho permitido por la acción adelantada por el ejército. Actualmente el gobierno Fujimori se encuentra frente al mismo dilema: reprimir a los productores de coca o afirmar la prioridad de la lucha antiguerrilla.

III. COMENTARIOS

Estos diferentes estudios muestran que la afirmación de la heterogeneidad del campo no es una fórmula vacía. ¿Qué hay de común entre la fértil región del Alto Huallaga, recientemente habitada por una población abigarrada que proviene de los cuatro rincones del país, y las tierras frías de Puno o del Cauca en las que un campesinado indígena ha mantenido sus vínculos comunitarios y no cultiva la coca sino para fines tradicionales? Pocas cosas en apariencia, a no ser el hecho de que en los tres casos nos encontramos frente a una población campesina confrontada a la guerrilla, que trata con dificultad de sobrevivir lejos de la ciudad y del Estado. Sin embargo, esto ya es algo y nos permite algunas observaciones de alcance general, comenzando por el papel desempeñado por el Estado, ese representante de la unidad nacional encargado del orden público y de aportar a los ciudadanos, así sean campesinos, un cierto número de servicios.

1. Las carencias del Estado

¿Señalar con el dedo al Estado, hacerlo ampliamente responsable de las dificultades del campesinado andino, mientras él mismo es

28 Así, por ejemplo, en Tingo María, en 1988, se sumó masivamente a una huelga general armada organizada por Sendero contra el empleo de herbicidas.

29 Véase Raúl González, "La batalla por el Huallaga: las armas de un general, entrevista con el general Alberto Arciniegas", en *Quehacer*, No. 62, diciembre 1989-enero 1990.

30 Como acontece en otras regiones, por ejemplo, en el Valle de Convención y en Lares.

duramente afectado por la violencia, el terrorismo y el narcotráfico, no equivale a buscar un "chivo expiatorio"? No, porque si existe alguna realidad que sea duramente compartida por las distintas regiones, ciertamente es la de la ausencia del Estado en el campo, ausencia que no data solamente de la época de la llegada del narcotráfico o de la guerrilla, aunque todos sus efectos sí se hayan dejado sentir sólo desde cuando estos últimos han hecho su aparición. Ciertamente en todas partes del mundo los campesinos suelen ser menos bien tratados que los ciudadanos. Pero en América Latina esta realidad toma con frecuencia la forma de un colonialismo interno que hunde sus raíces en una historia de conquista y pretende que el campesinado no exista sino como base material para una exacción unilateral de riquezas y como objeto de un poder autoritario más preocupado por su sumisión que por su ciudadanía. Los "pobres" se encuentran ante todo en el campo³¹, lo cual significa que los campesinos, productores indispensables de alimentos para la ciudad, experimentan las mayores carencias alimenticias, las más altas tasas de mortalidad, la esperanza de vida más corta, a la vez que son los menos atendidos en su salud y los menos instruidos. Abandonados a sí mismos, sin protección social y sin justicia, carecen, en cuanto productores, de infraestructura (vías, electricidad, etc.), de medios técnicos, de créditos. Pero es al Estado a quien le compete extender sus servicios, cuidar, educar, proteger, hacer reinar la justicia, apoyar la producción mediante la asistencia técnica, el crédito y las inversiones, sin lo cual predomina la desarticulación, el dualismo, es decir, la no integración de regiones y de seres humanos en el espacio nacional. De este abandono sufre ante todo el campesinado tradicional, el de las tierras altas como las del Cauca y de Puno. Aunque allí las comunidades al menos cuentan con un tejido comunitario que aún les permite organizar la vida social y que puede ser utilizado para la defensa de ciertas reivindicaciones. Pero, ¿qué decir de los pequeños colonos, ex-

pulsados de sus terruños por el crecimiento demográfico, la ruina o la violencia y que han llegado a desbrozar la selva con la esperanza de una vida mejor?

En estas regiones, donde —como se dice con frecuencia— "se juega el porvenir agrícola del país", el Estado está aún más lejano o hace presencia de manera únicamente represiva. La ausencia de una organización social tradicional, conjugada con la incertidumbre sobre la propiedad de las tierras, con las dificultades de comunicación y unas mayores expectativas en materia económica, crean la base material y social sobre la cual prosperan la guerrilla y el narcotráfico. La guerrilla porque se mantiene a la caza de situaciones sociales explosivas y porque estas regiones ofrecen, por su lejanía y su carencia de infraestructura, un terreno propicio para la lucha armada. El narcotráfico por razones similares, a las que se añaden un suelo y un clima favorables a la coca. Es un lugar común decir que los pequeños productores —y se trata aquí ciertamente de pequeños productores, (en promedio 0,5 ha de coca por colono en el Huallaga)— se dedican a la coca ante la imposibilidad de encontrar otros cultivos capaces de responder a sus necesidades económicas. ¡Y esto es absolutamente cierto! Entre tanto el Estado —que bajo la presión internacional prohíbe la coca, criminaliza al pequeño productor y le reprocha (con razón o sin ella) que apoye a la guerrilla— no hace con frecuencia otra cosa que oponerse a los efectos de sus propias carencias, corriendo además el riesgo de acrecentarlos con el uso de la represión.

2. Campesinado y lucha armada

Existe una visión romántica que se inspira en las grandes revueltas indígenas de los siglos pasados, en la revolución mexicana, la sierra maestra o la gran marcha: la imagen de un campesinado cuyo potencial revolucionario sólo esperaría la primera ocasión para manifes-

31 El 56% de las familias rurales, frente al 23% de las familias urbanas, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta en América Latina. Véase Jacques Chonchol, *Campesinos por venir*, Ed. La Découverte, 1986, p. 19, y también CEPAL, "La pobreza en América Latina: Dimensiones y Políticas", en *Estudios e Informes*, No. 54, 1985, p. 7.

tarse. En los años sesenta esta imagen impulsaba ya a los militantes revolucionarios a escoger el campo como teatro de sus operaciones y todavía motiva la estrategia rural de las guerrillas peruanas y colombianas. Esta esperanza no ha resultado siempre frustrada. En el Guaviare, en el Huallaga, en ciertos momentos en el Magdalena Medio, la guerrilla parece moverse como "un pez en el agua" y los campesinos le conceden un grado de legitimidad que no parece haber obtenido jamás el Estado. Pero hemos visto también cómo en estas mismas regiones el apoyo campesino era precario, cómo la guerrilla no dudaba en emplear la fuerza para obtenerlo, cómo no significaba una adhesión ideológica al proyecto político defendido por la guerrilla, y cómo en otras regiones, campesinos no menos combativos y "conscientes" rechazaban la lucha armada hasta el punto de organizarse y de tomar las armas contra ella.

De hecho, si en Colombia o en el Perú las guerrillas son en buena parte rurales, están lejos de ser siempre "campesinas", a diferencia de otras formas de organización armada, como las "rondas campesinas"³² y las organizaciones de autodefensa que pueden surgir de un proceso interno de movilización comunitaria. Salvo excepción, la guerrilla sigue siendo un actor externo que llega a una región cualquiera movida por razones estratégicas (intereses mineros, proximidad de una frontera, control de una vía...), con la esperanza de injertarse en los conflictos locales o de beneficiarse de una fuente de financiación. Si, una vez implantada, demuestra capacidad para asumir las reivindicaciones locales y ofrece a la población una protección eficaz contra otras formas de violencia, puede esperar un apoyo campesino. Pero una vez que la amenaza desaparece, o que la guerrilla por sus propios excesos y por la represión que atrae sobre los campesinos

(de parte del ejército, de la policía, de los paramilitares, de la mafia) aparece como un peligro aún mayor para la comunidad campesina, pierde el apoyo de ésta. La exterioridad de los movimientos de lucha armada se manifiesta con mayor fuerza cuando se trata de comunidades campesinas sólidamente estructuradas o de poblaciones indígenas. Porque los grupos en armas han demostrado el poco caso que hacen de las autoridades tradicionales y de aquello que las comunidades denominan "su autonomía". De allí surgen numerosas contradicciones que se transforman en confrontación cuando las comunidades campesinas resultan comprometidas en procesos de movilización en torno a reivindicaciones específicas, como ha acontecido con la movilización indígena en el Cauca, con los Ashaninka del Pichi-Palcazu y con la lucha por la tierra adelantada en Puno³³. De hecho, si ya los grupos armados se muestran poco inclinados a respetar las formas tradicionales de organización que les parecen ya superadas por la historia y manipuladas por las clases dominantes, toleran aún menos la presencia de movimientos sociales que escapen a su control, que escojan sus socios y propongan otras alternativas.

3. Coca: ¿Qué alternativa hay para los campesinos?

Quiéranlo o no, los productores de la hoja de coca deberán reconvertirse. Este artículo no pretendía definir responsabilidades en cuanto a la producción de la droga sino examinar cuál es la situación de los pequeños productores en las regiones que se dedican a ello. Como lo hemos visto, ésta es contradictoria: de una parte, la producción de hoja permite obtener ingresos indudablemente superiores —en circuns-

32 No hacemos aquí alusión a las "rondas de defensa civil", brigadas organizadas por el ejército y controladas por él, sino al movimiento de "rondas campesinas" tal como nació en el norte del Perú para extenderse luego en una amplia porción del país y que ve cómo las comunidades organizan un sistema de autodefensa autónomo. Véase **I Encuentro Nacional. Rondas Campesinas**, Lima, Perú, 1987.

33 Véase la posición de rechazo a la presencia guerrillera en las comunidades indígenas manifestada por la ONIC (Organización Nacional de los Indígenas de Colombia) en su congreso de 1986: ONIC, **II Congreso Indígena Nacional**, Bosa, febrero 1986, ediciones ONIC, junio 1989, y por los dirigentes indígenas de la selva peruana: Dossier "Amazonia: la virginidad perdida", en **Quehacer**, No. 62, diciembre 1989-enero 1990.

tancias iguales— a los que podrían ofrecer otros cultivos; de otra parte, la producción de coca provoca una llamarada de los precios al consumidor, una dolarización de la economía, un flujo considerable de población y, sobre todo, hunde al pequeño productor en la ilegalidad y la violencia y atrae a la mafia, la narcoguerrilla y las fuerzas represivas. La producción de coca está, pues, muy lejos de ofrecer sólo ventajas. Pero para que estos enormes inconvenientes lleguen a ser disuasivos se requiere de alternativas creíbles. Numerosos estudios adelantados por expertos agrícolas concluyen que, en regiones dotadas de un cierto potencial agrícola, como es el caso del Huallaga, otros cultivos pueden aportar ingresos netos a los productores, iguales o superiores a la hoja de coca y sin los mismos terribles inconvenientes³⁴. Pero estos estudios indican igualmente las condiciones requeridas para que ello acontezca: regularización de los títulos de propiedad, apoyo técnico y crédito, creación de una infraestructura para almacenar y distribuir la producción, organización de los productores e intervención en los circuitos de comercialización y, para ciertos productos, instalación de pequeñas fábricas de transformación (con el fin de disminuir el costo del transporte). Medidas que pueden parecer costosas y desproporcionadas con los medios de los que puede disponer un país como el Perú, presa de una dramática crisis económica y del déficit de las finanzas públicas. Pero la represión también es muy costosa y no produce riqueza alguna sino sólo la ruina del cultivador. Los éxitos iniciales experimentados por el PNR en Colombia y la respuesta positiva aportada a ciertos programas de sustitución de cultivos de coca en el Perú (y en Bolivia) indican el camino. Para que éste sea practicable es necesario separar narcotráfico y producción de la hoja y descriminalizar al cultivador. La transición de una economía a la otra sólo puede ser progresiva y las medidas de estímulo deben ganarle terreno a la represión. Se ha demostrado que la utilización de defoliantes alta-

mente tóxicos no disminuye en nada la producción global sino que lanza al pequeño productor contaminado en brazos de la guerrilla.

4. Violencia y Estado de derecho

Lo esencial de los cultivos destinados al narcotráfico se encuentra en las regiones de colonización. No es de extrañarse. Además del factor climático, las mismas razones que han impulsado al colon a abandonar su actitud original —de sobrevivir y mejorar la suerte de su familia—, le conducen, en ausencia de alternativas, hacia el cultivo prohibido. Tampoco se pueden esperar milagros de los programas de sustitución si no se discute el problema de conjunto de las políticas agrarias adelantadas por los Estados de los países productores. Vasto tema. La lucha contra la subversión armada así como la lucha contra el narcotráfico pasa por una reorientación de los recursos públicos en dirección del campesinado, bien sea que éste habite en las tierras altas o en las bajas. Exige una política agraria —política de precios, política fiscal y política de crédito— que sea menos sistemáticamente desfavorable al pequeño productor y permita una mejora de la productividad y la remuneración del trabajo campesino. Pasa también por un reconocimiento pleno y completo de las diferentes formas de organización campesina (ligas, consejos indígenas, sindicatos, rondas campesinas).

La experiencia ha demostrado que allí donde existen sólidas organizaciones indígenas o campesinas, la mafia o la guerrilla experimentan una gran dificultad para penetrar. En buena medida gracias a la presencia de una fuerte organización regional, y no a la acción de los militares, la mafia no se convirtió en ley en el Valle de la Convención —primer centro de producción legal de coca—, los paramilitares no prosperaron en el Cauca indígena, Sen-

34 Véase Ibán de Rementería, "Sí hay salidas al problema de la coca", en *Quehacer*, No. 68, diciembre 1990-enero 1991; Campaña europea de información sobre la droga, *Alternativas a los cultivos tropicales ilícitos*, Informe del seminario de Bruselas, Ed. Cota, 1990.

dero no se pudo ganar la región de Puno, el MRTA debió abandonar el Pichi-Palcazu, etc.

De aquí se deriva una última observación que concierne a la acción represiva del Estado: Colombia demostró el peligro que constituye la presencia en el país de grupos paramilitares financiados por la droga y todos los colombianos, comenzando por los campesinos, pagaron el precio de ello. El mayor peligro de subversión aparece cuando la violencia y la ausencia de derecho provienen del Estado mismo o son encubiertas por él. Las numerosas exacciones cometidas por el ejército y las diferentes fuerzas represivas con los campesinos so-pretexto de lucha antiguerrilla o antidroga —exacción regularmente denun-

ciada por las comunidades campesinas y las organizaciones de derechos humanos en Perú y en Colombia—³⁵, tienen por resultado no solamente el de alimentar el fenómeno que pretenden combatir sino, sobre todo, el de quitarle toda legitimidad al Estado cuando pretende defender una posición moral.

La idea de que sin Estado de derecho es imposible un verdadero desarrollo gana terreno en América Latina. Pero sin desarrollo, ¿cómo luchar contra los enemigos del Estado? Los campesinos de la cordillera reclaman lo uno y lo otro, aun cuando se ven obligados a pactar con la lucha armada o a producir hoja de coca para atender sus necesidades.

35 Véase Amnesty International, Perú: un pueblo entre dos fuegos, 1988; Amnesty International, Colombia: derechos del hombre, cuestión de urgencia, 1988.